

## La corporatización de la delincuencia

La seguridad ha emergido como uno de los temas más candentes dentro de la opinión pública. Aunque es cierto que la agenda pública suele ser manipulada por grupos de interés con objetivos particulares, es innegable que el tipo de crímenes ha evolucionado, destacando ahora por su violencia y organización.

La delincuencia ha adoptado estructuras corporativas, lo que permite su análisis a escala internacional. Un ejemplo ilustrativo de esta transformación es el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que ha extendido sus tentáculos más allá de sus fronteras.

La falta de políticas de inteligencia adecuadas y la carencia de infraestructura han dejado al Estado chileno rezagado y sorprendido ante crímenes como el secuestro del Mayor Ojeda. Peor aún ha sido la res-

puesta social, que se muestra débil por dos razones principales: la opacidad de estas agresiones y el poder desde el cual se ejecutan. La naturaleza poco visible e inmediata de estos crímenes, a menudo complejos, y la influencia de quienes los perpetran, contribuyen a la escasa reacción ciudadana.

¿Cuántos asesinatos de victimarios desconocidos han ocurrido en Chile hasta la fecha? ¿Cuántos muertos sin identificación se han encontrado? ¿Cuántos muertos más vendrán? Es momento de decir basta de una vez por todas, porque es esto lo que facilita esa percepción de pesimismo existente hacia el futuro en la población chilena. Un ejemplo claro es cómo el crimen organizado se ha hecho del control de los cascos céntricos de las grandes ciudades de Chile. ¿Cómo es posible la desidia gubernamental para que

esto ocurriera? Este tema es complejo que saldrá recurrentemente en todos los debates políticos de aquí en adelante, y la ciudadanía esperará una solución de carácter radical.

Ejemplos abundan: sicariato, extorsión, narcotráfico, acciones originarias de Colombia y Venezuela que han tomado por sorpresa al Estado chileno, a su sistema judicial y a la opinión pública. Sin embargo, las fuerzas policiales han hecho su trabajo al detener a los líderes de estas bandas, incluyendo a miembros del Tren de Aragua. Aun así, resulta insólito que estos delincuentes venezolanos hayan intentado organizar un motín en una cárcel de Alta Seguridad.

Desde junio, se han reportado problemas y amenazas contra gendarmes y otros reclusos. Es imperativo que el ministro Luis Cordeiro se pronuncie al res-

pecto. Si delincuentes organizan motines en una cárcel de Alta Seguridad, queda claro que esta no cumple con los estándares de seguridad necesarios. La infraestructura y las medidas de seguridad son insuficientes, y esto es un llamado de atención urgente.

El Estado chileno no puede permitirse estar desfasado ante esta violencia criminal. Cabría preguntarse legítimamente acerca de las responsabilidades políticas de que estas bandas ingresaran a Chile. Porque en el mediano plazo no hay una solución definitiva, y lo peor es que el problema exista, lo cual puede haber riesgo de politización del tema (algo que hoy existe) y erosión acelerada de nuestra democracia.

La adaptación de las políticas de seguridad y la mejora de la infraestructuras son esenciales para enfrentar este nuevo panorama delictivo.



*Fabián Bustamante Olguín,  
Académico Asistente del  
Instituto de Ciencias  
Religiosas y Filosofía,  
Universidad Católica del  
Norte, Coquimbo*

ma delictivo. La corporatización de la delincuencia exige una respuesta igualmente organizada y eficiente por parte de las autoridades. La seguridad pública debe ser priorizada con medidas concretas y efectivas, asegurando que el Estado no sea superado por las nuevas realidades del crimen organizado.